

## Crucial una agenda pública de transparencia

En estos tiempos tan retadores en que la devastación económica provocada por la pandemia del coronavirus ha exacerbado la disrupción de la gobernabilidad, se hace imperativo el replanteamiento de la gobernanza pública para impulsar la prosperidad y el desarrollo económico inclusivo. La pandemia del Covid-19 ha traído consigo grandes desafíos a la integridad pública, lo que demuestra que para mitigar y afrontar mejor el futuro es impostergable atender la ausencia de transparencia que propicia que la corrupción prospere durante eventos catastróficos.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional revelan que la pandemia no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción. La falta de transparencia ha abierto espacios para la corrupción que están socavando los sistemas de prestación de servicios esenciales y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia. Los casos de corrupción van desde la malversación de fondos, las prácticas malsanas de contratación de servicios y la compra de suplidos y materiales, y los ataques a los derechos humanos y la libertad de prensa.

Para atender los desafíos de la pandemia y mitigar la corrupción se

recomienda: (1) Adoptar procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos; (2) Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender; (3) Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos; (4) Reforzar las instituciones supervisoras y los organismos fiscalizadores anticorrupción de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan.



**Dra. Eneida  
Torres  
de Durand**

Directora  
Ejecutiva Centro  
de Gobernanza  
Pública y  
Corporativa

En este contexto, el nuevo gobierno enfrenta el desafío de construir una nueva forma de gobernar que va a requerir reformas abarcadoras a la gobernanza pública que atiendan sus fundamentos en lo relativo a fortalecer las capacidades institucionales y los procesos medulares de índole fiscal y presupuestaria. Se trata de transformar la cultura de la sociedad para propiciar el uso prudente de los recursos públicos para el bien común y fomentar su inclusión en la toma de decisiones de las prioridades a atender en la agenda pública.

Por ello, el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de este año exige aper-

tura, inclusión, participación y sobre todo voluntad política. No hay justificación para que el gobierno no cumpla con los estándares de transparencia y rendición de cuentas. En Puerto Rico, los estudios de investigación empírica y los proyectos demostrativos del Centro de Gobernanza han puntualizado el vínculo entre la gobernabilidad y la economía. Asimismo, se han identificado las mejores prácticas, existen modelos y ejemplos de municipalidades e instituciones que han realizado las reformas, los costos de las reformas son generalmente mínimos, la publicación de los documentos ya existe, solo es necesario validar y estandarizar su contenido para publicarlo en los portales electrónicos.

Esta visión de lo público conduce a nuevos sistemas y procesos de gobernar. Alude a nuevas prácticas de gobernanza focalizadas en la apertura y la transparencia del gobierno como eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades y modernizar la administración pública con el objetivo de promover prosperidad y competitividad económica, abrir las puertas hacia el escrutinio ciudadano, reducir el secreto y la opacidad que mina la confianza en el gobierno y le resta credibilidad a la inversión y la creación de riqueza, desalentar la corrupción y propiciar el bien común de la sociedad.

En esta instancia, el presupuesto estatal es la herramienta de política

pública más importante con la que cuenta el gobierno. Los presupuestos del gobierno son importantes para todos los ciudadanos, de hecho, es un derecho y el gobierno tiene el deber de proveer los mecanismos para la inclusión ciudadana y la rendición de cuentas para asegurar que el presupuesto se gaste de la manera en que fue planeado.

Es decir, en el proceso presupuestario se priorizan los programas, los proyectos y las acciones que el gobierno se compromete a apoyar y viabilizar. Esto incluye cómo se recaudaron los recursos, cómo se invirtieron y los resultados que se lograron. Sin estos datos, es muy difícil fiscalizar los compromisos, inversiones y resultados y comprender por qué se alcanzaron o no objetivos específicos. Implica la divulgación, explicación y justificación sobre las acciones de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de los recursos públicos, así como determinar las sanciones aplicables por su incumplimiento.

En esencia, los efectos de la pandemia en la gobernabilidad y la economía exigen instituir cambios fundamentales en la gobernanza y un mayor nivel de compromiso y determinación firme para movilizar una agenda pública de transparencia y responsabilidad fiscal.

Para conocer más sobre estos temas, visite nuestros portales en la web [gobernanzapr.org](http://gobernanzapr.org) y [puertoricotransparente.org](http://puertoricotransparente.org).